



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DÍGESTO PROVINCIAL

LEY N° 6723

Extpe. N° 91-3528/1993

Sancionada el 29/12/93. Promulgada el 11/01/94.

Publicada en el Boletín Oficial N° 14.341, del 17 de enero de 1994.

El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, sancionan con fuerza de LEY

Artículo 1°.- Apruébase en todas sus partes el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, suscripto en la ciudad de Buenos Aires con fecha 12 de agosto de 1993 entre el señor Presidente de la Nación Doctor Carlos Saúl Menem y el señor Gobernador de la provincia de Salta, Don Roberto Augusto Ulloa, el que como anexo forma parte de la presente ley.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá garantizar que con motivo de la aplicación del pacto al que se refiere el artículo primero no se afectará la coparticipación municipal, asegurando un monto mínimo equivalente a los ingresos coparticipables que les correspondieran a los mismos durante el Ejercicio Fiscal 1993.

Art. 3°.- *(Vetado por el Art. 1, del Decreto N° 18/1994).*

Art. 4°.- *(Vetado por el Art. 1 del Decreto N° 18 /1994).*

Art. 5°.- Comuníquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veintinueve días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y tres.

C.P.N. RAUL PAESANI – Fernando Zamar – Raúl Román – Carlos D. Miranda

**PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN
Y EL CRECIMIENTO**

En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes de agosto de 1993, se reúnen el señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem y los señores Gobernadores abajo firmantes con el objetivo de comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones, en un todo de acuerdo con el Programa “Argentina en Crecimiento 1993-1995” y con los Programas de Transformación que tienen encaminados las Provincias Argentinas, y declaran:

PRIMERO

Los señores Gobernadores han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales, una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en lo que es materia de su competencia según las Constituciones locales, en los siguientes actos de gobierno:

1. Derogar en sus jurisdicciones el Impuesto de Sellos.

La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al resto de las operaciones y sectores de la forma que determine cada provincia, y deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DIGESTO PROVINCIAL

La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de servicios administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo del servicio. Tampoco alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no luciden ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos productivos.

2. Derogar de inmediato los Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica. Incluso los que recaen sobre la autogenerada; y Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo se derogarán de inmediato las que graven directa o indirectamente, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo. Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquéllos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación.
3. Derogar de inmediato los impuestos que graven los intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios, y gradualmente todos aquéllos que graven la Nómina Salarial, completando la derogación antes del 30 de junio de 1995.
4. Modificar el Impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la exención de las actividades que se indican a continuación:
 - a) Producción primaria.
 - b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la Ley N° 21.526.
 - c) Compañía de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de Inversión y de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica.
 - d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta actividad.
 - e) Producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista.
 - f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.
 - g) Construcción de inmuebles.

Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

La exención no alcanzará a todas las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV, de la Ley N° 23.966.

Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones existentes a actividades no incluidas en el listado anterior y adecuarán las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DIGESTO PROVINCIAL

5. Modificar, a partir del 1° de enero de 1994, los impuestos sobre la Propiedad inmobiliaria a fin de que:
- Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso: superen el uno con veinte centésimos por ciento (1,20%) para los inmuebles rurales, el uno con treinta y cinco centésimos por ciento (1,35%) para los suburbanos y/o subrurales y el uno con cincuenta centésimos por ciento (1,50%) para los urbanos, y
 - La base imponible no supere el ochenta por ciento (80%) del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o subrurales o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales.

Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Viales y de Mantenimiento de Caminos o de otras similares a fin de que no superen el cuarenta céntimos por ciento (0,40%) del ochenta por ciento (80%) del valor de mercado de los inmuebles suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y se ajusten en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del servicio retribuido.

6. Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar sus respectivos Organismos Recaudadores; implementar coordinadamente, sistemas uniformes en todas las jurisdicciones que, como los regímenes de retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo, aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología que permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las ventas entre inscriptos. Las provincias coordinarán su acción con relación a los sistemas multilaterales de administración y solución de conflictos que aseguren la recaudación y control en el caso de contribuyentes que realicen actividades en más de una jurisdicción.
7. Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres años, a partir de la firma del presente convenio y una vez superado el período de transición y logrado un mayor control de la evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitada en los términos del punto 4) anterior, sea sustituida por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.
8. Asumir, a partir del 1° trimestre de 1994, la obligación de que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares a nivel Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia la que publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico. En el caso de las Provincias en que el impuesto sobre las patentes de automotores y/o similares, esté total o parcialmente a cargo de los municipios se propondrá a los mismos la adecuación al régimen precedente.
9. Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias.
10. Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados, en particular:
- Adhiriendo al Decreto 2.284/91 en lo que resulte de aplicación provincial;
 - Derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales en todos los sectores;



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DIGESTO PROVINCIAL

- Liberando al sector comercial (libre instalación de farmacias, derogación del monopolio de mercados mayoristas, horarios comerciales, etc.);
 - Eliminando todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarias;
 - Disponiendo la apertura de los mercados del transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las orientaciones adoptadas en el nivel federal;
 - Propiciando las medidas tendientes a disminuir los costos judiciales y del ejercicio profesional. En particular, la determinación de honorarios de abogados y peritos, se hará guardando relación con el número de horas trabajadas y no por el monto de la demanda o sentencia;
 - Adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo establecido en el Decreto 815/92;
 - Adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que corresponda, a la política federal en materia portuaria de acuerdo a lo establecido en el Decreto 817/92;
 - Adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en el Decreto 150/92 y sus modificatorios;
 - Reconociendo los controles y registros federales y de las demás Provincias en materia de medicamentos y alimentos.
11. Adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley N° 23.696 y por los artículos 1 y 2, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley N° 23.697, los que adecuados al ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en las Provincias. Idéntico procedimiento se adoptará, en lo que resulte de aplicación provincial, con los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 958/92, 1.492/92, 1.494/92, 1.813/92 y 2.293/92.
12. Las Provincias que suscriben este Acuerdo se adhieren, a los fines de determinar la competencia en materia de accidentes de trabajo, al criterio establecido en el artículo 16 de la Ley N° 24.028.

SEGUNDO

El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el proceso de crecimiento de la economía nacional y regionales, lo acordado precedentemente por los señores Gobernadores, conviene en la realización de los siguientes actos de gobierno.

1. Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y plazos en que se comprometen las Provincias.
En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia las que publica la Dirección General Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales. No Incorporado al Proceso Económico.
2. Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos productivos, en aquéllos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto de Sellos.
3. Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Esta disminución se hará acompañando las prioridades sectoriales reflejadas en las decisiones sobre operaciones y sectores alcanzados por las exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuestos a los Ingresos Brutos.
4. Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva superior al 18%.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DIGESTO PROVINCIAL

5. Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas Hipotecarias Rurales y de Bonos Negociables respaldados por hipotecas urbanas, dando participación en el operativo a los Bancos de Provincia, para viabilizar el financiamiento a mediano y largo plazo para el sector agropecuario y de la construcción.
6. Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales – con exclusión de las de Profesionales que prevé el artículo 56 de la Ley N° 18.038 (t.o. 1980) – en el caso de las Provincias que adhieran al nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna Provincia modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el mayor costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a cargo exclusivo de dicha Provincia. Esta transferencia se instrumentará a través de convenios particulares con cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la sanción de la Ley Provincial respectiva.
7. Asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumento de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.
8. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de \$ 725 millones establecidos como garantía del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley N° 24.130. Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por sesenta (60) días y en forma permanente a partir del momento en que cada Provincia cumplimente los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el presente Acuerdo. La garantía de \$ 725 millones se elevará a \$ 740 millones a partir del 1° de enero de 1994. Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos al párrafo anterior exceda un nivel para las provincias de \$ 800 millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de utilizar estos excedentes para cancelar deudas consolidadas contraídas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o para financiar erogaciones de capital y programas de reformas de los Estados Provinciales que sean aprobados por el Gobierno Nacional.

TERCERO

Las Provincias firmantes y el Estado Nacional incluyen en el presente Acuerdo la prórroga hasta el día 30 de junio de 1995 de la vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” suscripto el día 12 de agosto de 1992, ratificado por Ley N° 24.130, incluyendo las modificaciones introducidas por el punto 8) del artículo Segundo del presente.

Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del Acuerdo arriba mencionado a las Provincias de Corrientes con \$ 1.500.000 (pesos un millón quinientos mil) y del Chaco con \$ 500.000 (Pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios fiscales.

CUARTO



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DIGESTO PROVINCIAL

Las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las legislaturas, dentro de los diez días de suscrito el presente, los proyectos de ley en virtud de los cuales se aprueba este Pacto con la autorización a los respectivos Poderes Ejecutivos a dictar las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo.

El presente Acuerdo producirá efectos sólo en favor de las provincias que lo firmen y desde el momento del acto de firma.

Este Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, queda abierto a la adhesión por parte de los señores Gobernadores de las Provincias que no lo suscriben en el día de la fecha.

Refrendan el presente los señores Ministros del Interior, Dr. Gustavo Béliz y de Economía y Obras y Servicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo y el señor Secretario General de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Salta, 11 de enero de 1994.

Decreto N° 18

Ministerio de Economía

VISTO el proyecto de ley sancionado por la Legislatura Provincial, mediante Expediente N° 91-3528/93; y, CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1° de dicho proyecto, se aprueba en todas sus partes el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, suscripto en la ciudad de Buenos Aires con fecha 12 de agosto de 1993 entre el señor Presidente de la Nación Argentina Carlos Saúl Menem y el señor Gobernador de la provincia de Salta, Dn. Roberto Augusto Ulloa, el que como anexo forma parte del mismo; Que por dicho Pacto Federal, los señores gobernadores acordaron la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales;

Que tales políticas se refieren a: derogar Impuestos de Sellos; derogar impuestos provinciales que graven la transferencia del combustible, gas, energía eléctrica, y servicios sanitarios; derogar impuestos que graven intereses de depósitos a plazo fijo y en Caja de Ahorro, a los débitos bancarios y la Nómina Salarial; modificar los impuestos a los Ingresos Brutos disponiendo exenciones a la actividad primaria, prestaciones financieras, producción de bienes, servicios de electricidad, agua y gas, construcción de inmuebles; modificar los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria; intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar los organismos recaudadores provinciales; sustituir el impuesto a los Ingresos Brutos por un impuesto general al consumo; adecuar las valuaciones y alícuotas a aplicar con relación a los impuestos sobre las patentes de automotores y/o similares a nivel provincial según las que publica la Dirección General Impositiva; propender a la privatización de prestaciones de servicios u obras; dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el citado Pacto, la Provincia dictó los Decretos Nros. 1.533/93, 1.963/93 y 2.155/93 de Necesidad y Urgencia;

Que el artículo 2° del citado proyecto establece que el Poder Ejecutivo Provincial debe garantizar que, con motivo de la aplicación de este Pacto no se afectará la coparticipación municipal, asegurando los mismos ingresos coparticipables que le correspondieron durante el Ejercicio 1993;

Que la firma de este Pacto en su cláusula 2° apartado 8) está elevando la garantía de \$ 725 millones mensuales pactados por el Acuerdo suscripto el 12/08/92 entre la Nación y la Provincia, a \$ 740 millones a partir del 01/01/94, por lo que la adhesión al Pacto Federal garantiza los ingresos



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
DIGESTO PROVINCIAL

coparticipables municipales originados en la coparticipación nacional, como mínimo a los percibidos en el Ejercicio Fiscal 1993;

Que no obstante no haber sido tratado por la Legislatura Provincial el proyecto de ley que posibilita a la Dirección General de Rentas intensificar sus controles, fiscalizaciones y aplicar mayores sanciones a los incumplimientos, remitido a la Cámara de Diputados el 13/07/92, en la medida que la recaudación provincial mantenga los valores alcanzados en 1993 se mantendrá el monto de la coparticipación a los municipios, de los tributos provinciales;

Que tal objetivo de mantener niveles de recaudación provincial a diciembre de 1993, será factible a condición de que la Provincia cuente con los instrumentos legales necesarios;

Que por Decreto N° 2.770/93 se constituye una comisión de Reforma Administrativa Municipal, integrada por los señores Intendentes de la Provincia, Legisladores Provinciales y representantes del Gobierno Provincial, comisión que está funcionando para el cumplimiento de los objetivos perseguidos;

Que el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades constitucionales (artículo 141 de la Constitución Provincial), ha adoptado por sí las medidas necesarias en consonancia con lo establecido en el Pacto de referencia, constituyendo las disposiciones del artículo 3° del proyecto de ley, un avance sobre dichas facultades del Poder Administrador;

Que el artículo 4° del proyecto que nos ocupa, impone que se distribuya a los municipios, el monto equivalente al decrecimiento que pudiera ocasionar la eliminación del impuesto que grave la Nómina Salarial, transfiriéndoseles con la misma periodicidad con que se transfieren los fondos de coparticipación nacional;

Que al respecto, debemos señalar que tal impuesto es el de Cooperadoras Asistenciales, impuesto que no es coparticipable sino que corresponde a cada municipio en donde están instaladas las empresas o entidades patronales que son los contribuyentes y responsables de la imposición sobre el monto nominal de todo sueldo, jornal o cualquiera otra retribución originada por la prestación de servicios de sus obreros, empleados o cualquier otra persona que trabaje en relación de dependencia;

Que en consecuencia, el Poder Ejecutivo no puede tomar a su cargo la distribución de un monto equivalente al decrecimiento que para los municipios implica la eliminación de este impuesto convenido en el Pacto que se aprueba por el artículo 1° del proyecto;

Que en este caso, los municipios deben buscar alternativas de financiamiento a las erogaciones que pudieran quedar sin atender por la eliminación de dicho impuesto;

Que cabe tener presente que el objetivo del Pacto suscripto, es disminuir los costos a través de la menor presión fiscal y de esta manera disminuir gastos;

Que en consecuencia, no corresponde trasladar a la Provincia una nueva carga impositiva;

Por ello, con encuadre en los artículos Nros. 128 y 141 inciso 4) de la Constitución Provincial;

**El Gobernador de la Provincia
DECRETA**

Artículo 1°.- Obsérvase con carácter de veto parcial, conforme a los artículos 128 y 141 inciso 4) de la Constitución Provincial, los artículos 3° y 4° del Proyecto de Ley sancionado en Expediente N° 91-3528/93.

Art. 2°.- Con la salvedad establecida en el artículo precedente, promúlgase el resto del articulado como Ley N° 6.723.

Art. 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Economía y de Gobierno y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 4°.- Comuníquese a la Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

GÓMEZ DIEZ (I.) – Guzmán – Villalba Ovejero (I.) – Van Cauwlaert (I.).